

Temor

Luis Cordero Vega



En Chile, la percepción de inseguridad supera con creces la victimización real. El país ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en temor a caminar solo en la noche por la calle (Gallup, 2025); a su vez nuestro país es uno donde existe la mayor inquietud por la violencia (Ipsos, 2025) y el 68% manifiesta preocupación por ser víctima de violencia física (ICSO - UDP, 2025). Sin embargo, la proporción de hogares efectivamente victimizados es significativamente menor. Esa brecha no es un dato estadístico, es un problema político.

Despejar las razones de esa grieta es una de las interrogantes esenciales de la política pública en nuestro país, porque el temor tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana: afecta la movilidad, restringe el acceso a servicios básicos, lesiona la confianza interpersonal y diluye la participación comunitaria. En síntesis, fractura el tejido social, la adhesión a la democracia y el funcionamiento de los

mercados.

Aunque las hipótesis para explicar este fenómeno son múltiples, los especialistas las agrupan en: los efectos de la exposición repetida a actos violentos en medios de comunicación que van más allá de los fines informativos; las experiencias de la victimización asociada a incivildades por el efecto disruptivo que tienen en los barrios; la baja eficiencia de las acciones colectivas para mantener el orden social, y la ineficacia en los resultados del sistema político y de justicia. Todas estas causas admiten intervención pública. Ninguna se resuelve con retórica.

Dos informes recientes del PNUD permiten profundizar en esto. El Informe de Desarrollo Humano de Chile 2024, “¿Por qué nos cuesta cambiar?”, identifica el temor como una de las principales emociones negativas del momento, asociada a las deudas del cambio en el país por la ineficacia de sus instituciones.

“Un sistema político que instrumentaliza el temor para obtener ventajas electorales está apostando contra la convivencia que dice defender”.

El Informe sobre Democracia y Desarrollo para América Latina 2026, “Democracias bajo presión”, lo describe como el factor que erosiona la democracia, coarta la participación ciudadana y advierte que su instrumentalización política genera incertidumbre y daña la deliberación pública. En ambos informes el

diagnóstico converge, el temor no es solo una emoción individual, es una condición política.

Hacerse cargo del temor es hoy indispensable no solo para garantizar una vida digna, sino también para sostener una democracia que se erosiona desde adentro. Un sistema político que instrumentaliza el temor para obtener ventajas electorales no está gobernando, está apostando contra la convivencia que dice defender. Entender la Política de Seguridad Pública como una política de Estado es un primer paso. Cumplir sus objetivos más allá del ciclo electoral, la transforma en un propósito común.